



"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 001 - 2014 - GR-JUNIN/PR

Huancayo, 10 6 ENE 2014

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

El Informe Legal N° 894-2013-GRJ/ORAJ, de fecha 27 de Diciembre de 2013, y el Reporte N° 204-2013-GRJ-ORAF, con fecha de recepción 23 de Diciembre de 2013, sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Administrativa N° 798-2013-GRJ-ORAF con fecha 11 de Noviembre de 2013, interpuesto por el administrado **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO**;

CONSIDERANDO:



Que, con fecha 26 de Setiembre del 2013 y mediante Resolución Directoral Administrativa N° 700-2013-GR-JUNIN/ORAF, se abrió proceso administrativo disciplinario al servidor Sr. **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO**, ex Director Regional de Educación Junín, por estar incurso en presunta falta de carácter administrativo disciplinario tipificado como incumplimiento de las normas establecidas y negligencia en el desempeño de las funciones;



Que, se le imputa al procesado que mediante Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo N° 003888-UGEL-H de fecha 03 de agosto del 2011, se cesa por límite de edad a doña Teodora Frodita Rojas Torres, Cargo Trabajador de Servicio II, Nivel remunerativo STB de la Institución Educativa "Señor de los Milagros", Yauris, Huancayo; Sin embargo doña Teodora Frodita Rojas Torres interpone recurso de reconsideración contra dicha resolución, por lo que mediante Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo N° 000503-UGEL-H de fecha 09 de febrero del 2012 se resuelve dejar sin efecto en todos sus extremos la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo N° 003888-UGEL-H. Que posteriormente, sin tomar en cuenta lo dispuesto en la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo N° 00503-UGEL-H de fecha 09 de febrero del 2012, el Lic. **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO**, Director Regional de Educación Junín expide la Resolución Directoral Regional de Educación N° 00930-DREJ-2012, de fecha 23 de marzo del 2012 declarando excedente a partir del 23 de marzo del 2012 en el Centro de Educación Básica Especial "Señor de los Milagros" de Yauris, Distrito y Provincia de Huancayo, la plaza administrativa, del cargo de Trabajador de Servicio II, con código nexus N° s 1112119221D6, plaza vacante por cese de Rojas Torres, Teodora Frodita, según Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo N° 003888-UGEL-H. Es así que, con fecha 03 de abril del 2012, la servidora Teodora Frodita Rojas Torres interpone recurso de nulidad contra la Resolución Directoral



Doc: 531858
EXP: 370722



PRESIDENCIA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



Trabajando con la fuerza del pueblo!

Regional de Educación N° 00930-DREJ y cautelarmente solicita se disponga para continuar laborando en la misma institución educativa, por lo tanto, en aplicación al Principio de Legalidad, mediante el cual las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, la nulidad planteada por la administrada debió ser elevada al Gobierno Regional de Junín, a fin que exista pronunciamiento dentro del plazo legal, sin embargo contraviniendo el Principio de legalidad, el Lic. **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO**, Director Regional de Educación Junín, **DESPUES DE 06 MESES** mediante Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 04351-DREJ de fecha 21 de noviembre del 2012, resuelve la nulidad planteada dejando sin efecto la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo N° 000503-UGEL-H de fecha 09 de febrero del 2012, declara subsistente la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local – Huancayo N° 003888-UGEL-H de fecha 03 de agosto del 2011 y ratificando la vigencia de todos los aspectos de la resolución en mención, que resuelve cesar en el servicio a doña Teodora Frodita Rojas Torres; existiendo una indebida motivación en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Es ese sentido, la administrada en cuestión interpuso recurso de revisión contra la Resolución Directoral Regional de Educación N° 04351-DREJ, de fecha 21 de noviembre del 2012; consecuentemente ante los vicios existentes en el procedimiento administrativo antes indicado, el Gobierno Regional Junín, mediante R.G.R.D.S. N° 024-2012-GR-JUNIN/GRDS, de fecha 06 de febrero del 2013, se declaró la nulidad de oficio del artículo 1° inciso b) y del artículo 2 inciso b) de la Resolución Directoral Regional de Educación N° 00930-DREJ, de fecha 23 de marzo del 2012, de igual forma se resolvió declarar en su totalidad la nulidad de oficio de la Resolución Directoral Regional de Educación N° 04351-DREJ, de fecha 21 de noviembre del 2012. De todo lo expuesto, se advierte que tanto la Resolución Directoral Regional de Educación N° 00930-DREJ como la Resolución Directoral Regional de Educación N° 04351-DREJ, no han sido emitidos conforme al ordenamiento jurídico, precisando que el recurso de nulidad de fecha 03 de abril del 2012 planteado por la administrada Teodora Frodita Rojas Torres, recién fue atendida el 21 de noviembre del 2012 mediante Resolución Directoral Regional de Educación N° 04351-DREJ, suscrita por el entonces Director Regional de Educación Junín, Lic. **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO**, es decir, la petición de la impugnante fue resuelta por el funcionario antes mencionado, después de más de seis meses, contraviniendo de esta forma el Art 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, ello en concordancia con el numeral 143.1 del Artículo 143 de la normatividad antes mencionada. De otro lado, también cabe señalar que la nulidad le compete resolver a la autoridad superior de quien dicto el acto (Numeral 11.2 del Artículo 11 de la Ley N° 27444), en este caso el recurso de nulidad planteado por doña administrada debió ser conocido por el Gobierno Regional de Junín (Gerencia Regional de Desarrollo Social), más no por el Director Regional de Educación Junín, Lic. **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO** como sucedió en el presente caso, contraviniendo de esta forma el Principio de Legalidad y debido procedimiento que se debe observar, ya que el numeral 61.1 del Artículo 61 de la Ley N° 27444, prescribe que: **"La competencia de las entidades tiene su fuente en la constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas**





PRESIDENCIA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



administrativas que de aquellas se derivan". Finalmente, cabe precisar que el numeral 11.3 del Artículo 11 de la Ley N° 27444, señala que: **"La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido"**, por tanto por la disposición legal antes descrita, le acarrearía responsabilidad administrativa al entonces Director Regional de Educación Junín, Lic. **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO**, por haber autorizado y suscrito dos actos inválidos recaídos en la Resolución Directoral Regional de Educación N° 00930-DREJ como la Resolución Directoral Regional de Educación N° 04351-DREJ;

Que, tramitado el proceso conforme a su naturaleza, con fecha 11 de noviembre del 2013, mediante Resolución Directoral Administrativa N° 798-2013-GRJ/ORAF, se impuso la medida disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por 05 días al ex Director Regional de Educación Junín **JOSE CARLOS AGUILAR BERNADILLO**, quien haciendo uso de su derecho constitucional a la pluralidad de instancias, con fecha 29 de noviembre del 2013, interpuso recurso impugnatorio de apelación contra la misma, solicitando se declare la nulidad de la resolución apelada, sustentando su pretensión en los siguientes argumentos: a.-El recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local - Huancayo N° 003888-UGEL-H, siendo la misma UGEL de Huancayo la que resolvió dicho recurso mediante la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local - Huancayo N° 00503-2012-UGEL-H, dejando sin efecto la impugnada, resolución que se efectuó en atención a la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, lo que no ha sido meritado por la CEPAD del GRJ. b.-Señala que en el caso de la administrada, su recurso ha sido resuelto a su favor, siendo por ello que ningún articulado del aludido Decreto Supremo, menciona o establece que la UGEL haga conocer al superior de sus actos administrativos, salvo que sea desfavorable a la administrada. Igualmente menciona que, en el testimonio se detallan las funciones que debe asumir el apoderado en representación de la Dirección Regional de Educación y no sólo las aludidas en la resolución apelada, por ello, la apoderada estaba facultada para suscribirlas y no como equivocadamente sostiene la resolución apelada. c.-Afirma que el reglamento aprobado por Resolución Directoral N° 00154-2011-DREJ del 25 de enero del 2011, establece que la Oficina de Asesoría Jurídica, tiene como función emitir dictámenes u opiniones legales sobre recursos de impugnación en asuntos relacionados al servicio del sector como instancia administrativa, incluyendo la formulación del proyecto de resolución; por lo que la apoderada ha cumplido con sus funciones. d.- Finalmente menciona que existe una incorrecta interpretación del principio de verdad material en la resolución sub materia, pues la interpretación debe ser sistemática y no como el caso que nos ocupa en la cual tanto la DREJ y la UGEL, son entidades que administrativamente dependen del Gobierno Regional, por ello también el representante legal del GRJ tendría responsabilidad en los hechos, porque sus funciones están claramente determinadas en el Manual de Organización y Funciones;





PRESIDENCIA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



Que, conforme a lo establecido por el artículo 209 de la Ley N° 27444, el recurso impugnatorio de apelación debe ser interpuesto en el plazo de 15 días luego de notificado. En el presente caso, el recurso objeto de informe ha sido presentado dentro del plazo legal, conforme es de verse de la Constancia de Notificación N° 187-2013-GRJ/CEPAD;

Que, el artículo 211 de la misma Ley, exige que el recurso impugnatorio, debe indicar el acto del cual recurre, ser autorizado por letrado y cumplir los otros requisitos formales exigidos por el artículo 113 de la misma norma. Revisado el mismo, se concluye que cumple con los requisitos de forma exigidos por la Ley administrativa;



Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que, según el Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidas; así también, el numeral 1.5), regulando el Principio de Imparcialidad, establece que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general;



Que, el numeral 202.1) del artículo 202° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala con relación a la nulidad de oficio "En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agraven el interés público";



Que, al respecto se debe tener presente lo señalado por el Doctor Juan Carlos Morón Urbina, en su Libro: "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", 9na. Edición revisada y actualizada 2011, página 578, que señala con relación a la potestad anulatoria como expresión de la autotutela y el principio de legalidad: "Al poder jurídico por el cual la Administración puede eliminar sus actos viciados en su propia vía, y aun invocando como causales sus propias deficiencias, se le denomina potestad de invalidación. (...). Tales características sui generis emanan de la esencia misma de la potestad invalidatoria que radica en la autotutela de la Administración Pública orientada a asegurar que el interés colectivo permanente respete y no afecte el orden jurídico. Pero el fundamento de esta potestad no se encuentra en alguna mera potestad exorbitante de la Administración, ni siquiera en la autotutela de que él es titular, sino en la necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar satisfacción al interés de respetar la vigencia del principio de juridicidad o del orden jurídico. Si como se sane la Administración está sujeta al principio de legalidad, y ello constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, no se podría entender cómo un acto reconocidamente inválido, no podrá nunca satisfacer el interés que anima a la Administración, por ello que la posibilidad de la anulación de oficio implica en verdad una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo";

Que, por lo manifestado, es menester analizar con relación a la competencia del Director Regional de Administración y Finanzas para emitir un acto resolutivo



PRESIDENCIA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

sancionatorio como consecuencia de un proceso administrativo disciplinario. Al respecto, el Artículo 80° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en relación a Conflictos de competencia y abstención se establece que recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, **las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento**, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. Asimismo, en el artículo 231° de la acotada Ley en relación a **la competencia para la potestad sancionadora** se establece lo siguiente: "El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto";

Que, como se sabe, en un Estado Democrático de Derecho la sujeción del ordenamiento y la sociedad en su totalidad a los principios y los mandatos que la Constitución Política despliega son el fundamento mismo del sistema. En nuestro contexto, la Constitución Política contempla los derechos fundamentales y configura los poderes e instituciones que rigen el Estado junto a sus competencias. Por ello, su cumplimiento es de vital importancia, no solo por la trascendencia de su contenido, sino porque este genera un primer mandato sobre autoridades y ciudadanos de respeto a las derechos de las personas;

Que, se establece en el artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Junín que la Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional Junín; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y Titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional;

Que, en el artículo 167° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de La Carrera Administrativa y de Remuneraciones expresamente establece que la **instauración** del proceso puede hacerlo el titular de la entidad o el funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto [se oficializa el proceso investigador, iniciándose de manera formal el proceso administrativo disciplinario]; sin embargo, en el artículo 170° del mismo Reglamento establece que: La Comisión elevará un informe **al titular de la entidad** recomendando las sanciones que sean de aplicación y es **prerrogativa del Titular de la Entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse**;

Que, consecuentemente, de la disposición contenida en el artículo 170° se desprende que **la potestad sancionadora le corresponde al Titular de la Entidad**;

Que, en el Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de La Carrera Administrativa y de Remuneraciones como en su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, **no se establece** si la potestad sancionadora puede o no ser delegada, por ello, debemos remitirnos al Capítulo II de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, que establece el





PRESIDENCIA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



Procedimiento Sancionador y disciplinario la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados, asimismo, se establece que en las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes especiales, este Capítulo se aplicará con carácter supletorio, la potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia;

Que, en relación a la Potestad Sancionadora se señala principios especiales como el de Legalidad; Debido Procedimiento; Razonabilidad, Tipicidad, entre otras; estableciéndose en el **artículo 231°** de la acotada Ley que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, **sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto;**

Que, este artículo establece la imposibilidad de que la potestad sancionadora pueda ser delegada a autoridades distintas a las que fueron establecidas, es decir, **la potestad de sancionar no puede ser asumida ni tampoco delegada en órgano distinto.** Toda entidad estatal tiene una competencia determinada por ley, la misma que tiene su ejercicio práctico en las instancias o unidades administrativas correspondientes, por lo expuesto, las sanciones deben ajustarse a los límites legales de competencia y facultades propias de la entidad que dispone tales sanciones;

Que, siendo así, nos encontramos frente a una de las causales de nulidad del acto administrativo, contemplado en el numeral 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, que señala como uno de los vicios de acto administrativo que causan su nulidad, la contravención a la Ley, por lo que, corresponde declarar la nulidad de oficio del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Administrativa N° 798-2013-GRJ/ORAF, de fecha 11 de noviembre de 2013, por cuanto, la sanción ha sido impuesta por autoridad incompetente, como es la Directora (e) Regional de Administración y Finanzas, tanto más que, de acuerdo a la revisión del expediente administrativo no tiene resolución de encargatura para imponer este tipo de sanciones, siendo además que, dicha facultad es indelegable y peor aún no puede existir delegación de delegación; siendo que, la sanción no ha sido impuesta por el Titular de la Entidad cuya facultad es indelegable, conforme al artículo 231° de la Ley N° 27444, debe retrotraerse el procedimiento hasta el estado de que se emita resolución de sanción por la autoridad competente (Titular del Pliego);

Que, en dicho orden de ideas, resulta inoficioso pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el administrado Sr. **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO;**

Contando con la visación de la Gerencia General Regional y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Junín y de conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;





PRESIDENCIA

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



Trabajando con la fuerza del pueblo

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE NULA de oficio la Resolución Directoral Administrativa N° 798-2013-GRJ/ORAF, de fecha 11 de noviembre de 2013, por haber sido emitida por funcionario incompetente y se **RETROTRAIGA** el proceso, hasta que la Comisión Especial de Procesos Administrativos de la entidad, remita los actuados y su Informe Final a la Presidencia del Gobierno Regional de Junín.



ARTÍCULO SEGUNDO: INOFICIOSO pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el administrado **JOSE CARLOS AGUILAR BERNARDILLO**.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR copia de la presente resolución al interesado, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas y demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento fines pertinentes.

HYO 07 ENE 2014

Abog. Rodrigo Sulluchuco Porta
SECRETARIA GENERAL